



**UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”**



**FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO
SOCIALES Y EDUCACIÓN
UNIDAD DE POSGRADO**

**Gestión de políticas públicas de la Comisión de la
Mujer y Familia en el Periodo anual 2016-2017**

TESIS

**Para optar el Grado de Maestro en Ciencias
Sociales con Mención en Gestión Pública y
Gerencia Social**

AUTORA:

Cynthia Ruth Pacherre Gálvez

LAMBAYEQUE – PERÚ

2018

TESIS

Gestión de políticas públicas de la Comisión de la Mujer y Familia en el Periodo anual 2016-2017.

PRESENTADA POR:

Cynthia Ruth Pacherre Gálvez
AUTORA

M.Sc. Guadalupe Colter Apaza
ASESOR

TESIS PRESENTADA A LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRA EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA Y GERENCIA SOCIAL

APROBADO POR:

Dr. José Maquén Castro
PRESIDENTE

M.Sc. Martha Ríos Rodríguez
SECRETARIA

Dr. Manuel Bances Acosta
VOCAL

DEDICATORIA

Dedico este trabajo, a Dios por ser mi fuerza, a mis padres por su amor inagotable y a mis 3 hijos porque son mi motor para superarme.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a la Congresista Maritza García, por el apoyo brindado a mi persona durante la realización de la presente Tesis.

ÍNDICE

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO

ÍNDICE _____ **05**

RESUMEN _____ **06**

ABSTRACT _____ **07**

INTRODUCCIÓN _____ **09**

CAPÍTULO I _____ **11**

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN _____ **11**

Realidad Problemática _____ **11**

Formulación del Problema _____ **15**

Hipótesis _____ **15**

1.1. Objetivos _____ **15**

1.2. Justificación del Estudio _____ **15**

1.3.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO _____ **17**

2.1. Antecedentes _____ **17**

2.2. Base teórica _____ **23**

2.3. Base conceptual	24
----------------------	----

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1. Diseño y tipo de la investigación	41
3.2. Población y Muestra	42
3.3. Métodos y técnicas de recolección de datos	43
3.4. Análisis estadístico	44

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1. Presentación de los datos	44
4.2. Discusión de los resultados	45

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES	60
5.2. RECOMENDACIONES	61

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	62
-----------------------------------	-----------

ANEXOS

RESUMEN

El presente estudio titulado “Gestión de políticas públicas de la Comisión de la Mujer y Familia en el Periodo anual 2016-2017” tuvo como objetivo Analizar la gestión de las políticas públicas de la Comisión de la Mujer y Familia en el Periodo anual 2016-2017, para lo cual se llevó a cabo un estudio no experimental, transaccional y retrospectivo. Se consideró una muestra poblacional de 12 personas que brindaron información valiosa y veraz, resguardando su derecho al anonimato, toda vez que laboran y son conocedores de la problemática latente en dicha Comisión con respecto a la gestión de políticas públicas; los resultados del trabajo de campo consistente en las respuestas del cuestionario aplicado permitieron determinar que aunque si bien es cierto que la gestión de políticas públicas sobre los derechos de la mujer es eficaz en la mencionada Comisión, urge trabajar y profundizar más la gestión de políticas públicas en todo el territorio peruano, debiendo efectivizarse una coordinación más prioritaria entre todos los entes e instituciones que velan por los derechos de la mujer y, más específicamente, que afrontan la violencia contra la mujer.

Palabras clave: Gestión, Políticas, Públicas, Comisión, Mujer, Familia.

ABSTRACT

The purpose of this study entitled "Management of public policies of the Commission for Women and the Family in the 2016-2017 Annual Period" was to analyze the management of public policies of the Commission for Women and the Family in the 2016-2017 Annual Period for which a non-experimental, transactional and retrospective study was carried out. It was considered a population sample of 12 people who provided valuable and truthful information, safeguarding their right to anonymity, since they work and are imbued with the latent problem in this Commission with respect to the management of public policies; the results of the fieldwork consisting of the responses of the questionnaire applied allowed to determine that although it is true that the management of public policies on women's rights is effective in the aforementioned Commission, it is urgent to work and deepen the management of public policies throughout the Peruvian territory, a more priority coordination must be made between all the entities and institutions that watch over women's rights and, more specifically, that address violence against women.

Keywords: Management, Policies, Public, Commission, Woman, Family.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el Perú trata de responder a la demanda internacional y nacional en lo referido a la reducción de las brechas de género, ello ha conllevado a que surgiera la voluntad de implementar la Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, norma que establece líneas de acción para todos los órganos del Estado y en todos los niveles. En este sentido, la implementación de las políticas de igualdad de género ha hecho visible la necesidad de estudiar las dificultades inherentes a su proceso de diseño, los problemas que se presentan en las acciones de comunicación y articulación intersectorial, los ajustes a los que son sometidas durante su fase de implementación y, por último, el tema que es materia de la presente investigación: la eficacia de la gestión de las políticas públicas sobre los derechos de la mujer; investigación que resulta muy útil para determinar la pertinencia de las políticas en materia de género.

Al respecto, la Comisión de la Mujer y Familia trabaja en elaboración de dictámenes y propuestas legislativas que procuren lograr una sociedad más justa, igualitaria y menos violenta, donde las familias se fortalezcan como núcleo de principios, de valores, de integridad, de tolerancia, de respeto a las diferencias y de esa manera contribuir a mejorar la calidad de vida y la plena vigencia de los derechos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes, de las personas adultas mayores, especialmente aquellas que se encuentren en situación de pobreza, abandono y exclusión social.

Es por todo ello que, al elaborar la presente investigación cuyo propósito es analizar y determinar la eficacia de la gestión de las políticas públicas sobre los derechos de la mujer en la Comisión de la Mujer, ha sido necesario tener en consideración que la importancia de analizar el proceso de implementación permite conocer cuáles fueron las razones que determinan el fracaso o éxito de una política (Portocarrero y Romero, 2000). Y es que la implementación de las políticas no está libre de obstáculos y mucho menos es un proceso fluido. Los elementos de la negociación e interacción entre quienes la formula y los que

tienen a su cargo la ejecución de implementarla se dan en forma paralela y permanente.

En tal sentido, la gestión de políticas públicas sobre los derechos de la mujer, se encuentran íntimamente ligadas a todo lo que es la violencia familiar, especialmente dirigida contra las mujeres, lo cual es un problema de salud pública que afecta tanto a los individuos como a las sociedades, porque se constituye como una violación de los derechos fundamentales de las personas, impidiendo la construcción de relaciones democráticas al interior de una familia y/o comunidad.

Según el Estudio Multicéntrico de la Organización Mundial de la Salud sobre “Salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer”, las mujeres corren mayores riesgos de experimentar la violencia en sus relaciones íntimas que en cualquier otro lugar. Ante ello, en el Perú a través de la Ley 26260, Ley de Protección contra la Violencia Familiar, se incentiva la creación de propuestas más eficaces en cumplimiento a los compromisos internacionales que ha asumido el Estado, sobre derechos humanos, a fin de adoptar medidas oportunas para prevenir, procesar y castigar la violencia ejercida contra las mujeres.

CAPÍTULO I

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Realidad problemática

Desde muchísimo tiempo atrás la mujer ha sido la gran olvidada, ausente e invisible por la historia, la filosofía, la medicina, la cultura, el deporte, la economía y, especialmente por la política; y es que desde siempre la mujer ha estado dedicada a la labor doméstica, el cuidado de los hijos y del hogar en sí mismo; empero, a la mujer el espacio público, el trabajo productivo y reconocidos en las cuentas públicas del país le han sido prohibidos, vetados en su real dimensión. Sin embargo, toda esta situación en los últimos años ha sido objeto de grandes transformaciones: la igualdad de género no solo favorece, sino que defiende a la mujer en todas estas dimensiones.

Sin embargo, las políticas públicas no siempre han resultado eficaces cuando éstas se han dado, resultando vital la dinámica del Estado y sus leyes para que estas políticas favorezcan realmente a la mujer y la familia.

Bodelón (1998) nos refiere que “las políticas públicas nos remiten a los mecanismos institucionalizados por los poderes públicos, o directrices preferenciales que enmarcan histórico-estructuralmente la responsabilidad del Estado en el bienestar de los ciudadanos; es decir, son un instrumento indispensable en un Estado social y democrático de Derecho como el nuestro para conseguir la integración de la mujer; en contrapartida, se debe superar que las políticas puedan tener como resultado el aumento de la exclusión y el refuerzo de ciertos estereotipos que subyacían desde un principio en la base de esos grupos; y que la reivindicación de la diferencia y de la exigencia de derechos específicos tenga su origen en principios comunitaristas”.

En ese contexto, por ello a nivel mundial las políticas públicas a favor de la mujer han alcanzado logros importantes, así diversos estudios indican que “la decisión de analizar las políticas públicas que inciden positivamente en el logro de la igualdad de género se sustenta en la convicción del papel activo que, como una condición clave para alcanzar el desarrollo, debe desempeñar el Estado en la construcción de sociedades igualitarias; en este

contexto, las políticas públicas son una herramienta fundamental para impulsar las transformaciones hacia mayores niveles de justicia, además de expresar la decisión política de los gobiernos de avanzar en la solución de los problemas de desigualdad que afectan a las mujeres” (Benavente y Valdés, 2014).

Actualmente es harto conocido el esfuerzo que realizan los Estados para favorecer a la mujer en cuanto a políticas públicas; uno de los propósitos de éstos es avanzar hacia la igualdad de género y el cumplimiento del rol que les compete como Estados.

En ese sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe enfatiza que “las buenas prácticas de políticas públicas para una democracia inclusiva son las que reconocen a las mujeres como sujetas políticas” (CEPAL, 2010).

La problemática de la violencia hacia las mujeres ha venido siendo tratada desde el Estado Peruano, con una marcada influencia de las corrientes internacionales, habiendo manifestado su voluntad política de aunarse a los esfuerzos de garantía y de respeto de los derechos humanos de las mujeres traducidos en la suscripción de diversos instrumentos de carácter supranacional los cuales contemplan la defensa de los derechos humanos de la mujer.

La violencia contra la mujer es un problema multicausal y multifactorial es abordado por los distintos lineamientos de política que están bajo la rectoría de diversos sectores a fin de permitir, por un lado, establecer un conjunto de intervenciones que de manera diferenciada benefician a distintos grupos poblacionales y etarios (infancia y adolescencia, mujeres en edad fértil, personas adultas mayores y personas con discapacidad); y por el otro, potenciar resultados esperados, pues la violencia contra la mujer, exige un conjunto de estrategias en distintos niveles.

En nuestro país la Comisión de la Mujer y Familia, conforme se establece en el artículo 34° del Reglamento del Congreso de la República, es un grupo especializado de trabajo conformado por congresistas, y tiene como función principal de legislar tanto en el estudio y dictamen de los proyectos de ley;

tiene la función de seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales; además, absuelve las consultas en los asuntos que son puestos en su conocimiento de acuerdo a su especialidad. Su trabajo se basa en el parámetro legal de la Constitución Política del Perú, del Reglamento del Congreso de la República, y de la normativa supranacional que sirve de marco las materias a legislar, particularmente los diferentes tratados y consensos internacionales; todo ello en defensa de los derechos de la mujer y familia.

Con el transcurso del tiempo, el Estado peruano y las diferentes instituciones que lo conforman intervienen en las acciones de prevención y atención de la violencia familiar y sexual, influenciando sus políticas en base al enfoque de género, no obstante, las políticas deben abordar a la mujer situándola en su contexto y al mismo tiempo estudiando las relaciones que conlleva con sus pares, para evitar perder la perspectiva y atención en la dimensión real del problema social.

Más aún si en nuestro país, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) del año 2015, 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia física, sexual o psicológica por parte de sus parejas. En este mismo año, la PNP registró 137 742 denuncias por violencia familiar, cerca del 90% son víctimas mujeres; asimismo, recibió 5702 denuncias de violación sexual, siendo el 93% mujeres y el 71% menores de edad.

El desarrollo de la presente investigación nos permite inferir que existe un gran avance en el estado peruano en relación a las políticas públicas que se han creado a favor de la igualdad de género y la disminución de la violencia familiar y sexual y dentro de estas políticas se cuenta con la Comisión de la Mujer y Familia, lo que se va encontrando es que existen políticas públicas adecuadas y se siguen creando más políticas, sin embargo, el problema es saber qué tan eficaz es la gestión de éstas para contrarrestar realmente la violencia contra la mujer y la familia.

En tal contexto, nuestra problemática se circunscribe a analizar la eficacia de la gestión de políticas públicas de la Comisión de la Mujer y Familia toda vez que debería ser –creemos- una prioridad el poner fin a todas las formas

de discriminación contra las mujeres y las niñas, eliminar todas las formas de violencia contra ellas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación, así como emprender reformas que otorguen a las mujeres la igualdad de derechos a los recursos económicos.

Creemos que, a la luz de la problemática expuesta, la Comisión de la Mujer y Familia tiene un importante rol que cumplir, por lo que resulta necesario determinar la eficacia de la gestión de políticas públicas de dicha comisión.

1.2. Formulación del problema

¿Qué tan eficaz es la gestión de políticas públicas de la Comisión de la Mujer y Familia en el periodo anual 2016-2017?

1.3. Hipótesis

La Gestión de las Políticas Públicas de la Comisión de la Mujer y Familia en el Periodo anual 2016-2017 a la luz del marco legislativo nacional, es eficaz. “Las hipótesis indican lo que estamos buscando o tratando de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas de manera de proposiciones” (Caballero R., A. 2000).

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Analizar la gestión de las políticas públicas de la Comisión de la Mujer y Familia en el Periodo anual 2016-2017.

1.4.2. Objetivos Específicos

- Fundamentar teóricamente el sustento del análisis de la Gestión de las Políticas Públicas de la Comisión de la Mujer y Familia en el Periodo anual 2016-2017.
- Determinar a través de la aplicación de una encuesta la eficacia de la Gestión de las Políticas Públicas de la Comisión de la Mujer y Familia en el Periodo anual 2016-2017.
- Demostrar la eficacia de la Gestión de las Políticas Públicas de la Comisión de la Mujer y Familia en el Periodo anual 2016-2017.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes del estudio

Si bien no se ha encontrado estudios científicos o de tesis sobre la temática directamente relacionada con nuestro estudio, se prevé la alusión de investigaciones sobre políticas públicas.

Ramos (2013), en su tesis titulada “Análisis de la Aplicación de las Políticas Públicas en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMDES a través de los Servicios de los Centros Emergencia Mujer de Lima, San Juan de Lurigancho y Comas durante los años 2008-2010” tuvo como objetivo Analizar la aplicación de las políticas públicas en favor de la disminución de la violencia familiar a través del Programa Nacional Contra la violencia Familiar y sexual del Ministerio de la Mujer y Desarrollo social y proponer prácticas que garanticen una adecuada gerencia del programa. La investigación tuvo como metodología de trabajo realizar un análisis cualitativo de la eficacia del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual a través de los servicios de atención brindados en los Centros Emergencia Mujer de Lima, San Juan de Lurigancho y Comas en los años 2008-2010. Este estudio cualitativo contó con una herramienta cuantitativa que es una encuesta que ha permitido analizar la opinión de trabajadoras y trabajadores de diferentes CEMS. En esta investigación se concluyó que existe un gran avance en el estado peruano en relación a las políticas sociales que se han creado a favor de la igualdad de género y la disminución de la violencia familiar y sexual y dentro de estas políticas se cuenta con el programa en análisis (PNCVFS), lo que se va encontrando es que existen políticas adecuadas y se siguen creando más políticas, el problema es el déficit en la implementación de éstas dentro del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. Los Centros Emergencia Mujer del presente estudio son servicios desde el Estado que inicialmente se crearon para reducir la ruta crítica que tienen que hacer las usuarias que acuden a estos servicios, pero que no se han podido efectivizar para cumplir esta función,

solamente se cuenta con un centro que brinda todos los servicios en los años 2008-2010.

Al respecto, es preciso destacar como antecedentes también lo acontecido en 1979 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con lo que se incorporó a las mujeres a la esfera de los derechos humanos, en dicho instrumento sólo se aborda en forma tangencial el problema de la violencia contra las mujeres; una de sus deficiencias es precisamente la falta de una definición clara de la violencia de género. La preocupación específica por este problema comenzó a manifestarse a partir de 1980, cuando en la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer celebrada en Copenhague se adoptó la resolución titulada "La mujer maltratada y la violencia en la familia"; asimismo, en el párrafo 288 de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer (1985), documento emanado de la Tercera Conferencia Mundial, se contemplan consideraciones directas relacionadas con la violencia contra las mujeres. A partir de entonces, las Naciones Unidas han organizado encuentros de grupos de expertos sobre la violencia contra las mujeres y han tomado medidas con el objeto de que se preste atención al tema a través de mecanismos como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el Consejo Económico y Social, la División para el Adelanto de la Mujer, la Oficina de Estadística y el Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia. En 1989, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó que los Estados Miembros informaran sobre la violencia contra las mujeres y las medidas adoptadas a nivel gubernamental para erradicarla.

Según Benavente y Valdés (2014), en su Informe titulado "Políticas Públicas para la Igualdad de Género. Un aporte a la autonomía de las mujeres", auspiciado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2014, indican que "La decisión de analizar las políticas públicas que inciden positivamente en el logro de la igualdad de género se sustenta en la convicción del papel activo que, como una condición clave para

alcanzar el desarrollo, debe desempeñar el Estado en la construcción de sociedades igualitarias. En este contexto, las políticas públicas son una herramienta fundamental para impulsar las transformaciones hacia mayores niveles de justicia, además de expresar la decisión política de los gobiernos de avanzar en la solución de los problemas de desigualdad que afectan a las mujeres”.

En el Perú, los derechos de la mujer son actualmente una política con carácter de prioridad, entrelazada con la igualdad de género, en tal sentido, el rol del Estado se cumple en esta tarea, siendo su propósito la creación de políticas públicas para la igualdad de género. Para ello será preciso considerar la Matriz para la recopilación de políticas públicas para la igualdad de género elaborada por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. A través de esta matriz se pone a disposición de los actores del Estado y de la sociedad civil una herramienta que permita evaluar y entender el proceso de la política pública, y la forma como estas políticas son un aporte en el avance hacia la igualdad de género. Se trata de una matriz que considera las distintas fases del ciclo de la política pública y que fue concebida como una herramienta lo suficientemente rigurosa para recoger en detalle el contenido y el proceso de la política y lo suficientemente amplia como para no dificultar o imposibilitar la generación de información. Teniendo la igualdad como horizonte, por medio de la matriz se sugiere evaluar las políticas públicas en su capacidad para enfrentar la injusticia socioeconómica, expresada en la distribución injusta de bienes y recursos; las injusticias legales y culturales, que se manifiestan en el dominio cultural, y la injusticia en la representación, referida a la jurisdicción del Estado y a las reglas que organizan la confrontación.

En Brasil, la Ley 11340 María da Penha (2006), reconoce el derecho de todas las mujeres a vivir una vida sin violencia y considera este tipo de agresión como un atentado a los derechos de las mujeres. La ley obliga al Estado y a la sociedad a proteger a las mujeres de la violencia doméstica y familiar, independientemente de su edad, clase social, raza, religión y orientación sexual. La Ley María da Penha incorpora un nuevo paradigma al

reconocer la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y no como un crimen privado de menor gravedad. Se aplica así a la violencia contra las mujeres el régimen jurídico aplicable a las violaciones de los derechos humanos.

Los antecedentes considerados en la elaboración de esta política incluyeron, en primer lugar, la Constitución de la República Federativa del Brasil, promulgada en 1988, en que se reconoce la violencia doméstica en el artículo 226, párrafo 8, y la obligación del Estado de abordarla: el Estado asegurará la asistencia familiar en la persona de cada uno de los que la integran, creando mecanismos para evitar la violencia en el ámbito de sus relaciones. Sin embargo, no había en el Brasil una ley específica sobre este tema.

Esta ley considera la experiencia de las comisarías de la mujer y las casas de acogida. Desde la primera comisaría de la mujer, creada en São Paulo en 1985, el número de este tipo de instituciones aumentó a más de 300, localizadas en prácticamente todos los estados del Brasil, con diferentes denominaciones: comisarías de defensa de la mujer (DDM), comisarías para la mujer (DM), comisarías especializadas en atención a la mujer (DEAM) y comisarías especializadas de atención a la mujer (DEAM). Estas comisarías realizan acciones legales, de prevención y de investigación, llevan el registro de los informes a la policía y pueden solicitar a los jueces medidas urgentes de protección para las mujeres víctimas de violencia doméstica.

En Uruguay, la política de lucha contra la violencia de género, considera la violencia contra las mujeres como un atentado a sus derechos humanos y reconoce la obligación del Estado de protegerlas. Es una respuesta integral de abordaje de la violencia basada en género, enfocada en el trabajo conjunto y la coordinación de distintas entidades del Estado en el diseño y definición tanto de un plan de acción para erradicar la violencia doméstica y promover la equidad y el pleno goce de los derechos humanos, como de su seguimiento. Actúa indirectamente sobre injusticias de reconocimiento al hacer visibles identidades subordinadas y expuestas, por esta condición, a situaciones especiales de violencia. El objetivo de la política es erradicar la

violencia doméstica y promover la equidad y el pleno goce de los derechos humanos.

Esta política es el resultado de un proceso largo, impulsado principalmente por el movimiento de mujeres, que insistió en la necesidad de abordar el problema de la violencia contra las mujeres no como un tema privado, sino como un tema del cual el Estado debía responsabilizarse. Si bien la violencia contra las mujeres había comenzado a hacerse visible desde 1980, solamente a partir de la década de 1990 la violencia doméstica comenzó a considerarse como un tema de derechos humanos y un problema político. El término de la dictadura y la defensa de los derechos humanos por una sociedad civil organizada fueron parte fundamental del contexto en que se fortaleció el compromiso con los tratados y convenciones internacionales ratificados por el Uruguay.

El Perú es uno de los países latinoamericanos que mayores avances ha logrado en el reconocimiento de los derechos de la mujer. El Estado peruano ha desarrollado un conjunto de acciones para consolidar su posición en la sociedad. El establecimiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es un ejemplo palpable de ese empeño gubernamental.

El Estado Peruano ha suscrito y ratificado distintos instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos de las Mujeres, tanto vinculantes como de declaraciones políticas. Son especialmente relevantes la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, así como la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

2.2. Bases teóricas

2.2.1. Gestión de Políticas Públicas

2.2.1.1. Gestión

Se define a la gestión como “el proceso emprendido por una o más personas para coordinar las actividades laborales de otras personas con

la finalidad de lograr resultados de alta calidad que cualquier otra persona, trabajando sola, no podrá alcanzar” (Ivancevich 1996, pág. 11). Esta definición denota que dependiendo de la calidad con la que se gestione, se podrá obtener mejores resultados.

En esa misma línea, Ivancevich afirma que “La gestión constituye un ciclo con rasgos cualitativos y cuantitativos relacionado constantemente con los medios de producción y la fuerza de trabajo, delimitada específicamente por los fines de la empresa en función de la calidad y satisfacción del cliente. La gestión debe trabajar en las fuentes en la que se organizan las mejoras, con el propósito de lograr la mejor calidad del producto-servicio, en la transferencia de este propósito hacia los diferentes integrantes de la organización” (p. 13).

La gestión pública es, en esencia, una gerencia del conocimiento, la cual busca superar problemas y facilitar acciones de los ciudadanos y de sus organizaciones, este proceso requiere contar con un calificado recurso humano, para anticiparse a los problemas y resolver situaciones difíciles, así como proyectarse a un futuro posible y diseñar los caminos necesarios que permitan su integración con la sociedad. (Andia Valencia 2009, pág. 9)

“Lograr una gestión pública de calidad implica enfocarla como una política transversal que se adopte como premisa fundamental del marco programático institucional, y se contemple en cada una de las etapas de la gestión de servicios y atención de los usuarios, y que en esa medida se traduzca en nuevas pautas de interacción entre la gestión pública y los ciudadanos” (Moyado, 2002).

El concepto de calidad en la gestión pública está muy vinculado a los de eficiencia y eficacia, pues “en su conjunto, la gestión municipal significa la organización y utilización óptima –eficiente y eficaz– de todos los recursos institucionales, humanos, financieros, tecnológicos, materiales y culturales a disposición de los gobiernos locales para fines de interés colectivo y bienestar de la población” (Massolo, 2003, pág. 15).

Si aplicamos el concepto de eficacia a la gestión de políticas públicas, podríamos decir que la eficacia consiste en “el grado en que se alcanzan los objetivos propuestos. Un programa es eficaz, si logra los objetivos para los que se diseñó. Una organización eficaz cumple cabalmente la misión que le da razón de ser. (...) Una iniciativa resulta eficaz si cumple los objetivos esperados en el tiempo previsto y con la calidad esperada” (Mokate 2001, pág. 2).

2.2.2. Políticas

2.2.3. Públicas

Para efectos de esta investigación, entendemos por políticas públicas al conjunto de objetivos, decisiones y acciones que se llevan a cabo para solucionar los problemas que en un determinado momento histórico los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios.

Según Ordaz (2008), “Problemas que llegan a ser politizados, socialmente problematizados o colocados en la agenda pública, movidos por valores, creencias o discursos dominantes que imperan en una sociedad y dan cuenta de su historia sociopolítica. En tal sentido, el establecimiento de las políticas públicas depende del funcionamiento de un complejo campo de fuerzas y relaciones de poder, donde los grupos de interés de diversa índole e institucionalidad, según sus posicionamientos en la sociedad y sus diferentes cuotas de poder, priorizarán ciertas cuestiones por sobre otras”. (pág. 45)

Una de las definiciones más usadas señala que una política pública es “el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de autoridad gubernamental” (Thoening y Meny, 1989:130). Mientras otro autor amplía el concepto señalando que “una política pública está conformada por actividades orientadas hacia la solución de problemas públicos, en la que intervienen actores políticos con interacciones estructuradas y que evolucionan a lo largo del tiempo” (Lemieux, 1995:7). Los actores involucrados no sólo determinan los problemas, sino que además eligen las estrategias o formas que consideran más eficaces para

resolverlos, entre una serie de posibilidades o alternativas de acción, pese a que no siempre cuentan con la fundamentación o evidencia acerca de tal eficacia (Merlo, 2012 pág. 98).

Así, el proceso de formulación de políticas constituye una construcción social donde intervienen múltiples actores que plasman ciertas concepciones particulares de la realidad.

De esta manera las políticas públicas pueden verse como un conjunto de acciones y omisiones que ponen de manifiesto una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que es de interés para diversos actores de la sociedad, por lo que tienen siempre, en mayor o menor medida, contenidos o consecuencias sociales.

2.2.4. Las Políticas Públicas y el enfoque de género.

La Organización de los Estados Americanos, plantea que las políticas públicas con enfoque de género son “las estrategias y acciones concretas orientadas a modificar las desigualdades de género, tanto en acciones destinadas a la población en su conjunto como a iniciativas tendientes a corregir la discriminación que sufren las mujeres y a afirmar sus derechos”.

En ese sentido, la teoría dice que un Estado que incorpora el enfoque de género a las políticas públicas se caracteriza por: “considerar las diferencias entre géneros, las relaciones entre mujeres y hombres y sus diferentes realidades sociales, roles, espacios que ocupan, etc.; evaluar los efectos sobre mujeres y hombres, en forma diferenciada, de las políticas, programas y medidas legislativas (nuevas o existentes); analizar y evaluar el control de recursos en mujeres y hombres; visualizar y dimensionar las diferentes problemáticas, condiciones y necesidades de mujeres y hombres, así como la forma en que les afectan, de manera diferenciada” (OEA, 2011:18).

Como resultado de lo antes expuesto se sobreentiende que al hablar de una política pública diseñada e implementada en base a un tratamiento especial y diferenciado según las necesidades de hombres y mujeres,

respetando las características específicas de su condición y sus relaciones sociales, estaremos hablando de una política pública con enfoque de género.

En este sentido, las acciones de política deben tener un carácter fundamentalmente preventivo, para que no sigan vulnerándose el derecho de las personas, a una vida libre de violencias, así como acciones restitutivas que contribuyan a estabilizar y restablecer los derechos de las personas que han sido víctimas de violencias y discriminación basadas en género.

En el Perú, las políticas públicas no son neutrales al género. Las situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, en diferentes ámbitos del desarrollo humano, corroboran la persistencia de tratos diferentes y discriminatorios que afectan especialmente a las mujeres quienes afrontan las mayores desventajas y limitaciones para el acceso y control de recursos para su progreso, tales como oportunidades de educación, capacitación, participación y decisión, propiedad, créditos, etc. Asimismo, en su rol tradicional de principales responsables del cuidado y las tareas del hogar, están expuestas a la realización de dobles o triples jornadas (laborales, domésticas, comunales) que las privan de un recurso fundamental para la ampliación de sus oportunidades: el tiempo. Si las políticas públicas no aplican el enfoque de género que les permita identificar las necesidades e intereses diferenciados de cada grupo, corren el riesgo de mantener las desigualdades existentes entre mujeres y hombres en lugar de lograr resultados de igualdad de género (MIMPV, 2014).

Existen estudios que anuncian la emergencia de un feminismo de Estado, el mismo que es definido como la capacidad que desarrollan los Estados para integrar la perspectiva de género en las políticas públicas y en la toma de decisiones (Valiente, 2005). Como herramienta de análisis, el feminismo de Estado permite interpretar y conocer la efectividad de las instancias que velan por la igualdad; no obstante, importa la limitación de analizar el tema desde “los intereses de las mujeres”.

2.2.5. Enfoque de Género

Parte del reconocimiento de la existencia de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres construidas en base a las diferencias sexuales y que son el origen de la violencia hacia las mujeres. El enfoque de género permitirá diseñar estrategias de intervención orientadas al logro de igualdad de oportunidades entre hombres y Mujeres

2.2.6. La Comisión de la Mujer y Familia

La Comisión de la Mujer y Familia en el Perú, trabaja en elaboración de dictámenes y propuestas legislativas que procuren lograr una sociedad más justa, igualitaria y menos violenta, donde las familias se fortalezcan como núcleo de principios, de valores, de integridad, de tolerancia, de respeto a las diferencias y de esa manera contribuir a mejorar la calidad de vida y la plena vigencia de los derechos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes, de las personas adultas mayores, especialmente aquellas que se encuentren en situación de pobreza, abandono y exclusión social.

La Comisión de la Mujer y Familia tiene como misión liderar el trabajo parlamentario con la elaboración de dictámenes y propuestas legislativas que procuren lograr una sociedad más justa, igualitaria y menos violenta, donde las familias se fortalezcan como núcleo de principios, de valores, de integridad, de tolerancia, de respeto a las diferencias y de esa manera contribuir a mejorar la calidad de vida y la plena vigencia de los derechos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes, de las personas adultas mayores, especialmente aquellas que se encuentren en situación de pobreza, abandono y exclusión social (CMF, 2016).

Y es que la sociedad peruana se ve conmovida por algún hecho violento que se difunde ampliamente a través de los medios de comunicación. Eventos de violencia contra la mujer y la familia parecen hacerse cada vez más frecuentes y suelen avivar las demandas de la sociedad por acciones que logren reducir este flagelo social. Las respuestas hasta ahora por parte de las instituciones pertinentes han sido predominantemente de tipo punitivo para los perpetradores de violencia, pero muy poco se ha hecho

por establecer políticas que afronten el problema de manera integral, de tal forma que cada vez haya menos casos de violencia. Frente a esta realidad, el Estado peruano ha adoptado una serie de medidas para fortalecer la respuesta del sistema de administración de justicia y la política pública relacionada con la violencia contra las mujeres. Entre ellas tenemos:

- La aprobación de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y su reglamento.
- La aprobación del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016 -2021
- Aprobación de la Guía de Procedimientos para la intervención de la Policía Nacional del Perú en el marco de la Ley N° 30364.
- Designación de Fiscalías Provinciales Penales a nivel nacional para conocer casos de feminicidio.
- Establecer el “Enfoque de género” como una política a ejecutar por el Poder judicial en todos sus niveles; la creación de la “Comisión de Justicia de Género” y la aprobación del “Plan Nacional de capacitación a jueces, sobre justicia con perspectiva de género periodo 2016”.

Sin embargo, estos avances normativos no serán suficientes si los sectores involucrados no garantizan que las políticas públicas frente a la violencia contra las mujeres sean implementadas de manera coordinada e interinstitucional y cuenten con presupuesto necesario para su implementación.

En el Perú existen escasas medidas legales y normativas dirigidas a controlar y prevenir la violencia en la comunidad. Por ello, es prioritario seguir elaborando e implementando intervenciones, programas y políticas públicas para hacer frente a esta problemática.

2.2.6.1. Objetivos de la Comisión de la Mujer y Familia

- Proponer iniciativas legislativas destinadas a mejorar la calidad de vida y protección de los derechos de las mujeres, las niñas, niños y adolescentes y de las personas adultas mayores con énfasis en aquellas de especial vulnerabilidad, en coordinación con los poderes del Estado y la sociedad civil.
- Promover ante el Pleno las propuestas legislativas para que lleguen a ser leyes, para lograr la efectiva y eficaz productividad legislativa de la Comisión.
- Crear grupos de trabajo y ejecutar estrategias adecuadas para el ejercicio del trabajo de control político y la fiscalización a los diferentes organismos públicos que se encuentren relacionados con la defensa y protección de las mujeres y de la familia.
- Organizar actividades académicas descentralizadas, con la finalidad de difundir los temas relacionados a las mujeres, a las familias y a las personas adultas mayores.

2.2.7. Los derechos de la mujer

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, a pesar de no ser vinculante, fue dotada de un contenido moral muy influyente.

La noción de derechos humanos se corresponde con la idea de la dignidad inherente a la persona humana, de modo que los derechos humanos pretenden la defensa de esa dignidad. Por ello, al hablar de derechos humanos se habla también de derechos fundamentales. Es decir, de aquellos inherentes a toda persona, que le pertenecen en razón a su dignidad humana y son necesarios para el libre desarrollo de la personalidad.

Es cierto que las mujeres han sido por fin reconocidas como sujetos de derecho y, en el contexto general, podemos hablar de sociedades igualitarias en el plano formal,⁵ ¿porque entonces el concepto de derechos humanos de mujeres? Hay que tener en cuenta que ha habido

todo un proceso hasta alcanzar este reconocimiento de la Declaración de 1948 y que, a pesar de ello, las mujeres continúan encontrando serios obstáculos para ejercer sus derechos de forma plena y para lograr salir de la posición de subordinación en la que se encuentran. Estos obstáculos y formas de discriminación son multifacéticas y de naturaleza y origen muy diversos, pues interactúan numerosos factores que se interrelacionan y determinan situaciones de exclusión, agudizándose su complejidad en el contexto actual de globalización. Por tanto, existe en la práctica una contradicción entre los ideales abstractos que recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la realidad, lo que ha llevado al surgimiento de nuevos actores sociales que reivindican su reconocimiento a escala mundial como sujetos titulares de derechos y que pretenden denunciar su situación de exclusión.

La Carta de las Naciones Unidas de 1945 establece en su Preámbulo que los pueblos de las Naciones Unidas se declaran resueltos a afirmar la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Ningún documento jurídico anterior había afirmado con tanta energía la igualdad de todos los seres humanos, ni se había referido al sexo como motivo de discriminación. Fruto de este compromiso, en 1946 se crea la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer como órgano que se encargaría a partir de entonces de las cuestiones relativas al mundo de las mujeres. Según la propia definición de los Derechos Humanos, no gozar de ellos implica una violación a la dignidad humana. El hecho de que buena parte de la humanidad no acceda a su pleno ejercicio de forma sistemática, lleva necesariamente a la reflexión sobre la definición misma y sobre cuáles son los elementos que impiden el “derecho a tener derechos”.

En el caso específico de las mujeres, los movimientos feministas han jugado un papel muy importante en la visibilización de la situación de marginación generalizada de las mujeres en el ejercicio de los derechos humanos, como un reflejo de la desigualdad de género y de la hegemonía masculina dominante. Además, estos movimientos han señalado las

direcciones que pueden guiar la reflexión y la posterior acción que lleve a la construcción de sociedades más justas e igualitarias.

En Perú, con la aprobación de la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (LIO) en el año 2007, y como consecuencia de las recomendaciones de los organismos internacionales, el Estado Peruano tiene la responsabilidad- a nivel nacional, regional y local- de impulsar, entre otros compromisos, los sistemas de monitoreo y evaluación de las políticas públicas en materia de igualdad de género. La necesidad de desarrollar políticas en materia de igualdad de género para el caso peruano y la importancia de evaluarlos comenzó en la década de los noventa, a raíz de la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (Beijing, 1995), la cual señalaba la responsabilidad que tienen los Estados miembros de elaborar políticas, planes, programas y proyectos en materia de igualdad de género como lineamientos para la erradicación de las brechas de género existentes.

A nivel legislativo, en el Perú la Comisión de la Mujer y Familia, trabaja en elaboración de dictámenes y propuestas legislativas que procuren lograr una sociedad más justa, igualitaria y menos violenta, donde las familias se fortalezcan como núcleo de principios, de valores, de integridad, de tolerancia, de respeto a las diferencias y de esa manera contribuir a mejorar la calidad de vida y la plena vigencia de los derechos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes, de las personas adultas mayores, especialmente aquellas que se encuentren en situación de pobreza, abandono y exclusión social.

En nuestro país, cuando sucede algún hecho violento, la sociedad peruana se ve conmovida ya que se difunde ampliamente a través de los medios de comunicación. Estos sucesos de violencia contra la mujer y la familia parecen hacerse cada vez más frecuentes y suelen avivar las demandas de la sociedad por acciones que logren reducir este flagelo social. Las respuestas hasta ahora por parte de las instituciones pertinentes han sido predominantemente de tipo punitivo para los

perpetradores de violencia, pero muy poco se ha hecho por establecer políticas que afronten el problema de manera integral, de tal forma que cada vez haya menos casos de violencia. Frente a esta realidad, el Estado peruano ha adoptado una serie de medidas para fortalecer la respuesta del sistema de administración de justicia y la política pública relacionada con la violencia contra las mujeres. Entre ellas tenemos:

- La aprobación de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y su reglamento.
- La aprobación del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016 -2021
- Aprobación de la Guía de Procedimientos para la intervención de la Policía Nacional del Perú en el marco de la Ley N° 30364.
- Designación de Fiscalías Provinciales Penales a nivel nacional para conocer casos de feminicidio.
- Establecer el “Enfoque de género” como una política a ejecutar por el Poder judicial en todos sus niveles; la creación de la “Comisión de Justicia de Género” y la aprobación del “Plan Nacional de capacitación a jueces, sobre justicia con perspectiva de género periodo 2016”.

Sin embargo, estos avances normativos no serán suficientes si los sectores involucrados no garantizan que las políticas públicas frente a la violencia contra las mujeres sean implementadas de manera coordinada e interinstitucional y cuenten con presupuesto necesario para su implementación.

En el Perú existen escasas medidas legales y normativas dirigidas a controlar y prevenir la violencia en la comunidad. Por ello, es prioritario seguir elaborando e implementando intervenciones, programas y políticas públicas para hacer frente a esta problemática.

2.2.8. Normativa jurídica, jurisprudencia y políticas públicas del Estado Peruano

En este acápite sobre nuestra realidad jurídica, jurisprudencial y política del Estado Peruano, es propio dejar sentado los documentos internacionales ratificados por el Perú en el contexto de la ONU. Cabe mencionarse los siguientes:

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (vigente para Perú desde el 28 de julio de 1978).
- Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en vigor para Perú desde el 03 de enero de 1981).
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en vigor para Perú desde el 28 de julio de 1978).
- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (en vigor para Perú desde el 29 de octubre de 1971).
- Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (en vigor para Perú desde el 13 de octubre de 1982).
- Protocolo Facultativo e la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en vigor para Perú desde el 09 de julio de 2001).
- Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (en vigor para Perú desde el 19 de marzo de 1967).
- Convenio (N° 100) relativo a la Igualdad de Remuneración entre la Mano de Obra Femenina y la Mano de Obra Masculina por un trabajo de igual valor (en vigor para Perú desde 01 de febrero de 1961).
- Convenio (N° 111) relativo a la Discriminación en materia de empleo y ocupación (en vigor para Perú desde el 10 de agosto de 1971).
- Convenio (N° 156) sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Trabajadores y Trabajadoras: Trabajadores con

responsabilidades familiares (en vigor para Perú desde el 13 de junio de 1987).

- Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (en vigor para Perú desde el 25 de setiembre de 1975)
- Convención sobre los Derechos del Niño (en vigor para Perú desde el 04 de octubre de 1990).
- Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

En el sistema interamericano de la OEA, son vinculantes para el Perú los siguientes documentos:

- Convención Americana sobre Derechos Humanos (en vigor para el Perú desde el 28 de julio de 1978).
- Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Protocolo de San Salvador” (en vigor para el Perú desde el 16 de noviembre de 1999).
- Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer (en vigor para el Perú desde el 11 de junio de 1956).
- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer: “Convención de Belém do Pará” (en vigor para el Perú desde el 04 de junio de 1996).

La determinación de los documentos de raigambre internacional que ha suscrito y que vinculan a Perú es importante por formar parte del derecho nacional, adquiriendo en el caso de los tratados de derechos humanos, el valor de norma constitucional.¹

¹ De esta forma, el Tribunal Constitucional Peruano ha señalado que estos tratados “detentan rango constitucional, por lo que están dotados de fuerza activa y pasiva propia de toda fuente de rango constitucional. Fuerza activa en la medida de que incorporan al ordenamiento jurídico de rango constitucional los derechos reconocidos por ellos, y fuerza pasiva ya que son normas que no pueden ser modificadas ni contradichas por normas infraconstitucionales e, incluso, por una reforma de la Constitución que suprimiera un derecho reconocido por un tratado o que afectara su contenido protegido”. STC N° 0025-2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC (Acumulados).

En la Constitución Política del Perú se dedica todo un capítulo a los tratados, señalándose su importancia y eficacia en el derecho nacional, así como determinando su sistema de aprobación.

Ahora, pasando a analizar la normativa jurídica peruana, relacionada con el presente trabajo, es propio iniciar con la Constitución Política del Perú de 1993, en la que se consagra como finalidad del Estado la defensa del ser humano y de su dignidad, y, asimismo, reconoce como ser humano al concebido, elevándolo a la categoría de sujeto de derecho privilegiado; proscribiendo la discriminación y reconociendo la igualdad ante la ley de todas las personas.

Es vital destacar que en su artículo 4 reconoce al matrimonio y a la familia como instituciones naturales hacia las que tiene el deber de protección y promoción, respectivamente¹⁵⁷. Mientras que, en el Código Civil Peruano 1984, específicamente en el Libro de Derecho de Familia¹⁵⁸, se enmarca la protección estatal respecto a esta institución; en el Código Penal Peruano de 1991, en armonía con el artículo 2 de la Constitución del Perú en el que reconoce a todas las personas el derecho a la vida desde el momento de la concepción y a la luz del artículo 4 que establece el deber del Estado de proteger la familia, el cuerpo sustantivo tipifica los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, entre ellos el aborto, del mismo modo que los delitos contra las instituciones de la familia y el matrimonio. Lo expuesto ha sido una síntesis de nuestra normativa constitucional y por las principales normativas sustantivas del Estado Peruano vigente, en donde siempre será propio develar las injerencias ideológicas en el cuerpo normativo y las políticas públicas del Estado Peruano.

Asimismo, es preciso puntualizar que, cualquier intento por construir una sociedad no puede desconocer realidades básicas e insustituibles como son: la vida y la familia. A fin de cuentas, pertenecen a lo más profundo de la persona, de la naturaleza humana. Si no se toman en cuenta, la sociedad estaría conduciendo hacia un rotundo fracaso.

Actualmente, se debe tener un optimismo sustentado, la sociedad peruana está a tiempo para enmendar y direccionar correctamente el

actuar de la sociedad y del Estado hacia el cumplimiento efectivo de su deber, ello sin desmerecer a otros estados con realidades similares.

En tanto se apuesta, por solución mediata, es propio dejar establecida también una solución inmediata que se viene impulsado por algunos grupos pro-vida y pro-familia: la participación ciudadana, a través del cual se debe centrar en la defensa objetiva de reales derechos fundamentales y humanos, como en la protección debida de las instituciones naturales, sin alterar la moral, las buenas costumbres y el orden público de la sociedad y el Estado.

De esta forma, se puede luchar contra las minorías que en realidad representan los activistas ideológicos organizados.

2.3. Definición y Operacionalización de variables.

2.3.1. Variable Dependiente

Gestión de Políticas Públicas.

2.3.2. Variable Independiente

Comisión de la Mujer y Familia.

Operacionalización de las variables:

VARIABLES	DEFINICIÓN	INDICADORES	ITEMS O ESCALA	TÉCNICA E INSTRUMENTO
Variable Independiente: Gestión de Políticas Públicas.	Según Tamayo (1997), "Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios"	Eficacia de las Políticas Públicas para los Derechos de la Mujer. Legislación Nacional favorecen los Derechos la Mujer. Las políticas públicas favorecen la igualdad de género.	SI (...) NO (...)	Técnica: ENCUESTA Instrumento: CUESTIONARIO
Variable Dependiente: Los Derechos de la Mujer.	Según Hosken (1981), "Los derechos de la mujer hacen referencia a la distinción de los derechos que se reconocen o bien se conceden a las mujeres y niñas en diferentes sociedades del planeta".	Eficacia de la Defensa y Promoción de los Derechos de la mujer en el Perú. Igualdad de Género. Reconocimiento de la mujer como sujetas políticas.		

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1. Diseño metodológico

3.1.1. Diseño de contrastación de hipótesis

El diseño de investigación a considerar en el presente trabajo es no experimental, transaccional y retrospectivo. El diseño es no experimental porque se realiza sin manipular las variables, ya que "no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables" (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 149); en este sentido, se procede a observar y analizar la gestión de políticas públicas bajo responsabilidad de la Comisión de la Mujer y Familia. Es una investigación transaccional por cuanto la recolección de datos se da "en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado" (Gómez, 2006, p. 102); los datos se tomarán en un solo momento, después de que ya han ocurrido en la realidad; y no tienen el objetivo de determinar su evolución o tendencia. Es una investigación retrospectiva porque "tiene como objetivo determinar relaciones entre variables que se presentan en hechos ya ocurridos, sin deducir relaciones causales" (Lerma, 2004, p. 64); en efecto, la investigación se avoca al estudio de las políticas públicas bajo responsabilidad de la Comisión de la Mujer y Familia.

El estudio es de tipo descriptivo - retrospectivo. 1) Descriptivo. El estudio describe el comportamiento o las características de las variables, partiendo de hechos observados y explorados, ya que este tipo de estudios "buscan especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice" (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 80). 2) Retrospectivo. Para desarrollar la investigación se recolectan los datos a través de un cuestionario; adicionalmente, se acopian datos de carácter documental de hechos ocurridos respecto a la gestión de políticas públicas.

Población y muestra

Nuestra población y muestra estará delimitada por los integrantes de la Comisión de la Mujer y Familia, durante el periodo anual 2016-2017.

3.2. Técnicas, instrumentos, equipos y materiales.

La recolección de datos para acopiar la información necesaria para desarrollar el trabajo de investigación se realizó a través de las siguientes técnicas: encuesta y revisión de documentación.

Encuesta. Como instrumento de esta técnica se ha utilizado un cuestionario dirigido a los integrantes de la Comisión de la Mujer y Familia. El cuestionario ha sido elaborado con la finalidad de levantar información relativa a la magnitud de la labor legislativa que desarrollan en la fase de la gestión de políticas públicas; de tal manera que la información procesada permita conocer si la Comisión de la Mujer y Familia desarrolla eficazmente sus funciones. El cuestionario está conformado por preguntas organizadas estructuralmente y son de tipo cerradas.

Método de información bibliográfica: para la investigación son aquellos que permitirán al usuario utilizar la información registrada en determinados documentos para llevar a cabo su propia investigación. Umberto Eco (1986) dice que una tesis estudia un objeto valiéndose de determinados instrumentos: los instrumentos son los libros y el objeto puede ser también un libro. En todo caso, la utilización de instrumentos bibliográficos en el desarrollo de cualquier investigación es absolutamente imprescindible.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1. Presentación de los datos

A continuación, se presentan los resultados de los datos obtenidos a través de la aplicación de un Cuestionario dirigido al personal que labora en la Comisión de la Mujer y Familia en el Periodo anual 2016-2017.

Tabla 1

Las políticas públicas en relación a la violencia contra la mujer que se han implementado por el actual gobierno y están efectivamente orientadas a la defensa de los derechos de la mujer.

Alternativa	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Si	12	100
No	--	--
Total	12	100%

Fuente: Elaboración propia por aplicación de la Encuesta al personal que labora en la Comisión de la Mujer y Familia en el Periodo anual 2016-2017.

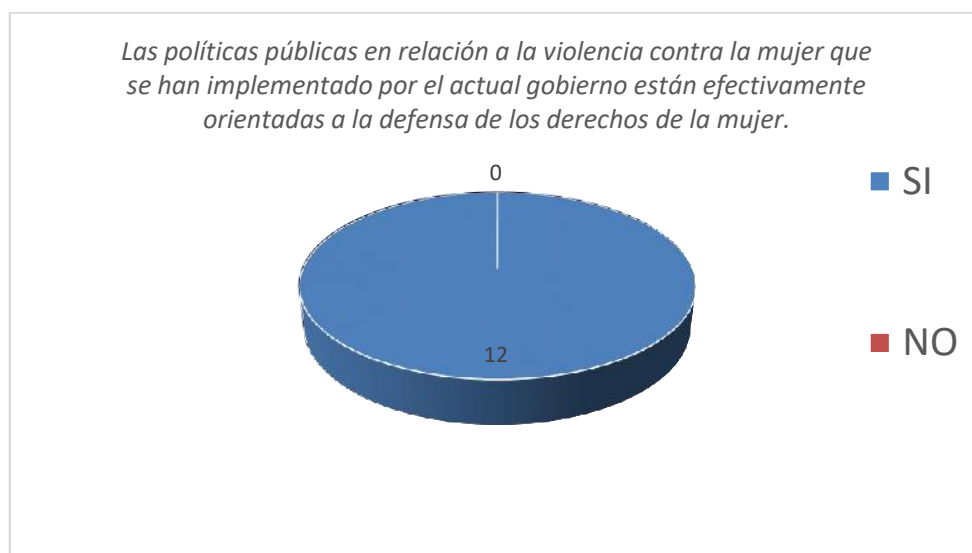


Figura 1

De la Tabla 1 podemos darnos cuenta que ante la pregunta *¿Considera usted que las políticas públicas en relación a la violencia contra la mujer que se han implementado por el actual gobierno están efectivamente orientadas a la defensa de los derechos de la mujer?*, los encuestados en un porcentaje

del 100% respondieron que SI; esto significa que los derechos de la mujer hoy en día son una prioridad en las políticas públicas de nuestro país.

Tabla 2

La actual gestión de políticas públicas llega a todos los actores involucrados (Municipalidades, Gobierno Regional, etc.) para la disminución de la violencia contra la mujer.

Alternativa	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Si	4	33.33
No	8	66.67
Total	12	100%

Fuente: Elaboración propia por aplicación de la Encuesta al personal que labora en la Comisión de la Mujer y Familia en el Periodo anual 2016-2017.

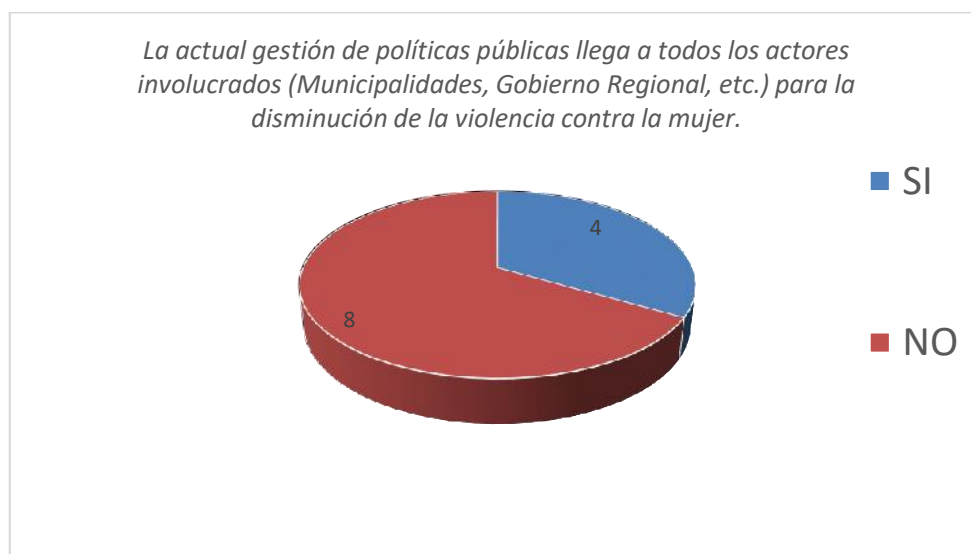


Figura 2

De la Tabla 2 podemos darnos cuenta que ante la pregunta *¿Considera usted que la actual gestión de políticas públicas llega a todos los actores involucrados (Municipalidades, Gobierno Regional, etc.) para la disminución de la violencia contra la mujer?*, los encuestados en un porcentaje del 66.67% respondieron que NO, y en un porcentaje del 33.33% respondieron que SI; esto significa que los encuestados en su gran mayoría creen o consideran que la actual gestión de políticas públicas no está llegando a todos los actores involucrados en la disminución de la violencia contra la mujer en nuestro país.

Tabla 3

Evaluación sobre el cumplimiento de las políticas públicas para la defensa de los derechos de la mujer.

Alternativa	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Buena	9	75
Regular	2	16.67
Mala	1	8.33
Total	12	100%

Fuente: Elaboración propia por aplicación de la Encuesta al personal que labora en la Comisión de la Mujer y Familia en el Periodo anual 2016-2017.

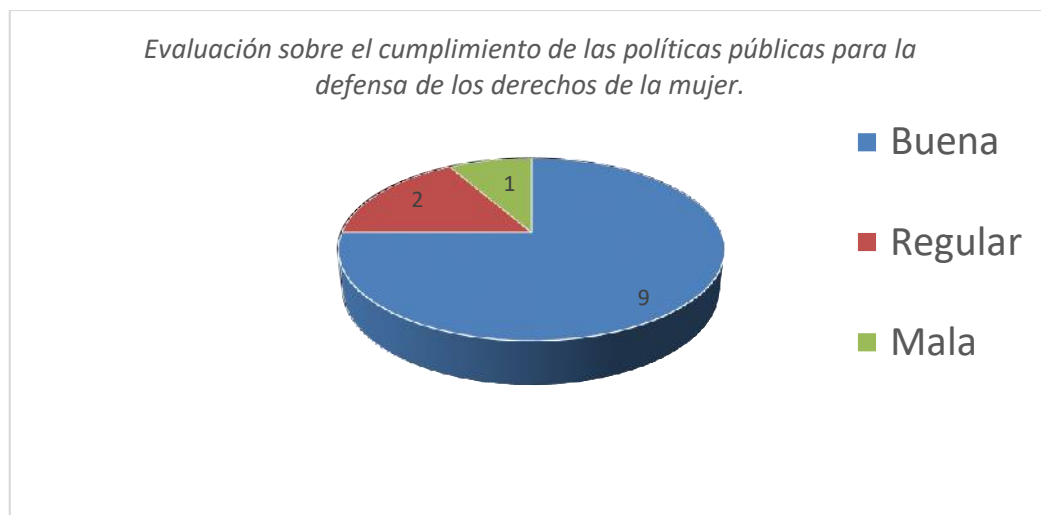


Figura 3

De la Tabla 3 podemos darnos cuenta que ante la pregunta *¿Cuál es la evaluación que usted puede hacer sobre el cumplimiento de las políticas públicas para la defensa de los derechos de la mujer?* Los encuestados en su gran mayoría, representados por un 75%, opinan que su evaluación respecto al cumplimiento de las políticas públicas para la defensa de los derechos de la mujer es BUENA, un 16.67% de los encuestados respondieron que su evaluación es REGULAR, y solo un 8.33% respondió que su evaluación era MALA.

Tabla 4

La gestión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables le está dando prioridad al tema de violencia contra la mujer.

Alternativa	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Si	10	83.33
No	2	16.67
Total	12	100%

Fuente: Elaboración propia por aplicación de la Encuesta al personal que labora en la Comisión de la Mujer y Familia en el Periodo anual 2016-2017.



Figura 4

De la Tabla 4 podemos darnos cuenta que ante la pregunta *¿Considera usted que la gestión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables le está dando prioridad al tema de violencia contra la mujer?*, los encuestados en un gran porcentaje representado por un 83.33% respondió que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables SI le está dando prioridad al tema de violencia contra la mujer; pero un 16.67% respondió que NO.

Tabla 5

La gestión de la Comisión de la Mujer y Familia le está dando prioridad al tema de violencia contra la mujer.

Alternativa	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Si	12	100
No	--	--
Total	12	100%

Fuente: Elaboración propia por aplicación de la Encuesta al personal que labora en la Comisión de la Mujer y Familia en el Periodo anual 2016-2017.

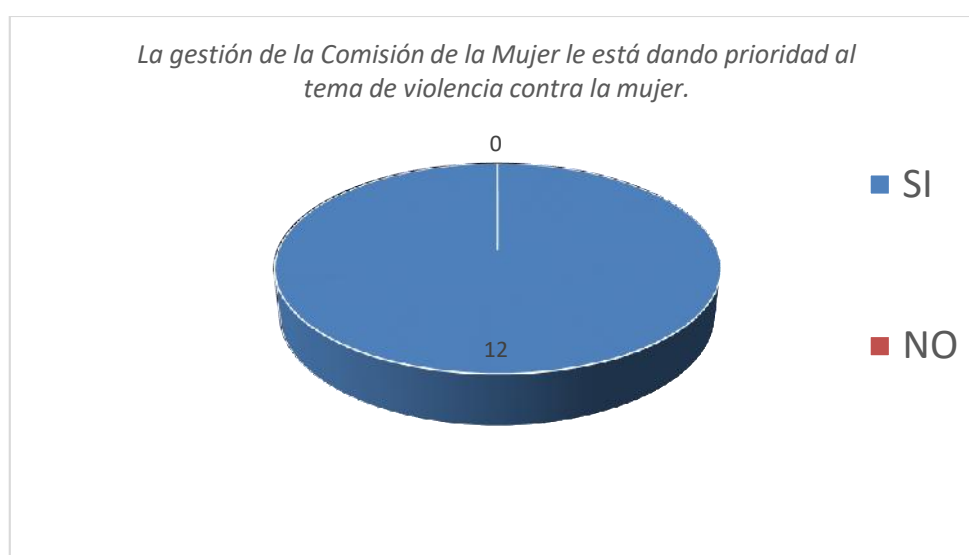


Figura 5

De la Tabla 5 podemos darnos cuenta que ante la pregunta *¿Considera usted que la gestión de la Comisión de la Mujer y Familia le está dando prioridad al tema de violencia contra la mujer?*, los encuestados por unanimidad en un porcentaje representado por un 100% respondió que la Comisión de la Mujer y Familia SI le está dando prioridad al tema de violencia contra la mujer.

Tabla 6

Las políticas públicas sobre los derechos de la mujer permiten solucionar los problemas de manera eficiente.

Alternativa	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Si	3	25
No	9	75
Total	12	100%

Fuente: Elaboración propia por aplicación de la Encuesta al personal que labora en la Comisión de la Mujer y Familia en el Periodo anual 2016-2017.



Figura 6

De la Tabla 6 podemos darnos cuenta que ante la pregunta *¿Considera usted que las políticas públicas sobre los derechos de la mujer permiten solucionar los problemas de manera eficiente?*, los encuestados en una gran mayoría representados por un porcentaje del 75% respondieron que las políticas públicas sobre los derechos de la mujer NO permiten solucionar los problemas de manera eficiente; pero un porcentaje del 25% respondieron que SI.

Tabla 7

Las políticas públicas incluyen el enfoque de equidad de género como instrumento fundamental para lograr la disminución de la Violencia Familiar.

Alternativa	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Si	11	91.67
No	1	8.33
Total	12	100%

Fuente: Elaboración propia por aplicación de la Encuesta al personal que labora en la Comisión de la Mujer y Familia en el Periodo anual 2016-2017.

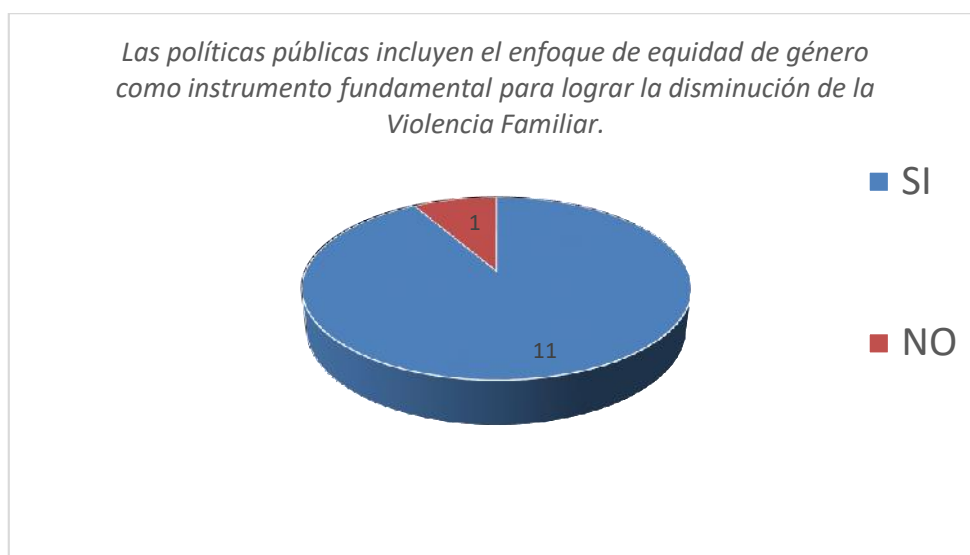


Figura 7

De la Tabla 7 podemos darnos cuenta que ante la pregunta *¿Las políticas públicas incluyen el enfoque de equidad de género como instrumento fundamental para lograr la disminución de la Violencia Familiar?*, los encuestados en una gran mayoría representados por un porcentaje del 91.67% respondieron que las políticas públicas SI incluyen el enfoque de género como instrumento fundamental para lograr la disminución de la violencia familiar; y solo un pequeño porcentaje del 8.33% respondieron que NO.

Tabla 8

Existe suficiente capacidad presupuestaria en la ejecución de las políticas públicas de lucha contra violencia de género en el Perú.

Alternativa	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Si	2	16.67
No	10	83.33
Total	12	100%

Fuente: Elaboración propia por aplicación de la Encuesta al personal que labora en la Comisión de la Mujer y Familia en el Periodo anual 2016-2017.

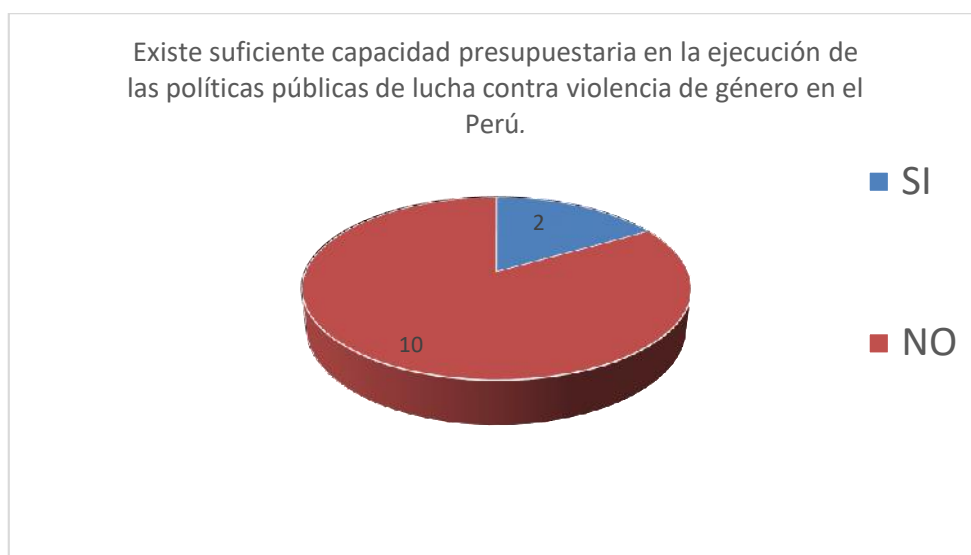


Figura 8

De la Tabla 8 podemos darnos cuenta que ante la pregunta *¿Usted cree que hay suficiente capacidad presupuestaria en la ejecución de las políticas públicas de lucha contra violencia de género en el Perú?*, los encuestados en una gran mayoría representados por un porcentaje de 83.33% respondieron que NO existe suficiente capacidad presupuestaria en la ejecución de las políticas públicas de lucha contra la violencia de género en el Perú; y solo un pequeño porcentaje del 16,67% respondieron que SI.

Tabla 9

Eficacia de la gestión de políticas públicas para la optimización de los derechos de la mujer en el Perú.

Alternativa	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Bien eficaz	11	91.67
Regularmente eficaz	1	8.33
Pésimamente eficaz	--	--
Total	12	100%

Fuente: Elaboración propia por aplicación de la Encuesta al personal que labora en la Comisión de la Mujer y Familia en el Periodo anual 2016-2017.



Figura 9

De la Tabla 9 podemos darnos cuenta que ante la pregunta *¿Qué tan eficaz considera Ud., que es la gestión de políticas públicas para la optimización de los derechos de la mujer en el Perú?*, los encuestados en su gran mayoría representados por un porcentaje de 91.67% respondieron que la gestión de políticas públicas para la optimización de los derechos de la mujer en el Perú es BIEN EFICAZ, un 8.33% respondieron que era REGULARMENTE EFICAZ, y nadie optó por la tercera alternativa.

Tabla 10

Se encuentra completamente informado (a) sobre la Ley Nro. 30364.

Alternativa	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Si	12	100
No	--	--
Total	12	100%

Fuente: Elaboración propia por aplicación de la Encuesta al personal que labora en la Comisión de la Mujer y Familia en el Periodo anual 2016-2017.

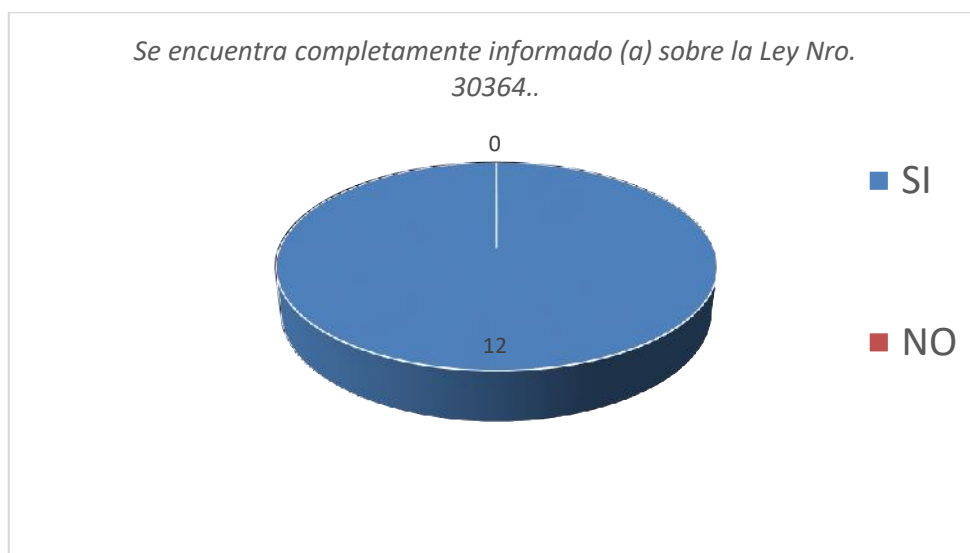


Figura 10

De la Tabla 10 podemos darnos cuenta que ante la pregunta *¿Se encuentra usted completamente informado (a) sobre la Ley Nro. 30364?*, los encuestados en forma unánime representados por un porcentaje de 100% respondieron que SI se encuentran completamente informados sobre la Ley N°30364.

Tabla 11

Haciendo un balance con su experiencia ¿cómo se ejecutan las políticas públicas de lucha contra violencia de género en el Perú?

Alternativa	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Excelente	4	33.33
Bien	5	41.67
Regular	3	25
Mal	--	--
Total	12	100%

Fuente: Elaboración propia por aplicación de la Encuesta al personal que labora en la Comisión de la Mujer y Familia en el Periodo anual 2016-2017.



Figura 11

De la Tabla 11 podemos darnos cuenta que ante la pregunta *¿Haciendo un balance con su experiencia ¿cómo se ejecutan las políticas públicas de lucha contra violencia de género en el Perú?*, los encuestados en un 33,33% optaron por la alternativa EXCELENTE; un 41,67% optaron por la alternativa BIEN, y un 25% optaron por la alternativa REGULAR; ningún encuestado optó por la alternativa MAL.

Tabla 12

Las políticas públicas Contra la Violencia hacia la Mujer le ayudan a la mujer a conocer acerca de sus derechos como mujer.

Alternativa	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Si	12	100
No	--	--
Total	12	100%

Fuente: Elaboración propia por aplicación de la Encuesta al personal que labora en la Comisión de la Mujer y Familia en el Periodo anual 2016-2017.

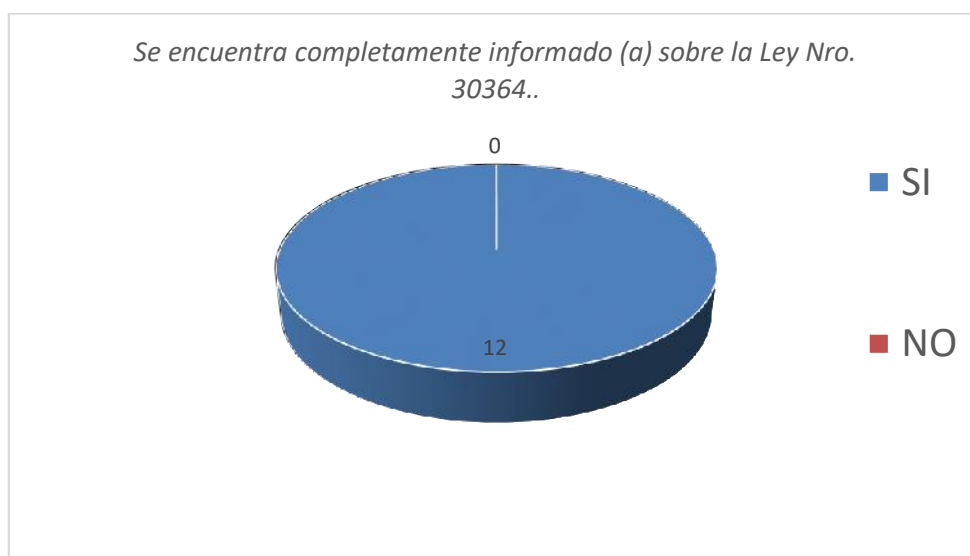


Figura 12

De la Tabla 12 podemos darnos cuenta que ante la pregunta *¿Para Ud., las políticas públicas Contra la Violencia hacia la Mujer le ayudan a la mujer a conocer acerca de sus derechos como mujer?*, los encuestados en forma unánime representados por un porcentaje de 100% respondieron que las políticas públicas contra la violencia hacia la mujer SI le ayudan a la mujer a conocer acerca de sus derechos como mujer.

4.2. Discusión de Resultados

La violencia contra la mujer es un tema que actualmente en el Perú reviste una gran preocupación, y que los gobiernos de turno en los últimos 20 años han tratado de resolver y/o superar de la mejor manera posible, atendiendo el clamor ciudadano para que la mujer sea protegida legalmente, e incluso la temática del feminicidio es un tema que ha implicado diversos puntos de vista legales y hasta controversiales. Ha sido así que, al respecto, con la creación de la Comisión de la Mujer y Familia con despacho en el Congreso de la República del Perú tiene como propósito elaborar dictámenes y propuestas legislativas que procuren lograr una sociedad más justa, igualitaria y menos violenta; sin embargo, a pesar de contar hoy en día con múltiples leyes que permiten la defensa y protección de la mujer, la violencia contra ésta ha aumentado considerablemente, por lo que se presume que la gestión de políticas públicas sobre los derechos de la mujer podría estar resultando ineficaz en su proceso o ejecución, presunción que resulta no válida contrastándola con los resultados obtenidos con la aplicación del cuestionario al personal que labora en dicha Comisión. Tal como se puede ver de los resultados de la Tabla 1, en la que ante la pregunta *¿Considera usted que las políticas públicas en relación a la violencia contra la mujer que se han implementado por el actual gobierno están efectivamente orientadas a la defensa de los derechos de la mujer?*, el 100% de los encuestados respondió que SI, es decir, nos encontramos ante una Comisión de la Mujer y Familia que tiene bien claro su criterio respecto a las políticas públicas y confirma dicho criterio afirmando que dichas políticas están efectivamente orientadas a la defensa de los derechos de la mujer. Sin embargo, esta efectividad se ve diferenciada cuando se pregunta: *¿Considera usted que la actual gestión de políticas públicas llega a todos los actores involucrados (Municipalidades, Gobierno Regional, etc.) para la disminución de la violencia contra la mujer?*, los encuestados en un porcentaje del 66.67% respondieron que NO, y en un porcentaje del 33.33% respondieron que NO; esto significa que los encuestados en su gran mayoría creen o consideran que la actual gestión de políticas públicas no está llegando a todos los actores involucrados en la

disminución de la violencia contra la mujer en nuestro país, lo cual indica que aunque existen lineamientos establecidos de políticas públicas, no se está dando una coordinación al 100% que involucre a todos los actores como pueden ser las Municipalidades y los Gobiernos Regionales, etc. Es más, cuando a los encuestados se les preguntó: *¿Cuál es la evaluación que usted puede hacer sobre el cumplimiento de las políticas públicas para la defensa de los derechos de la mujer?* Los encuestados en su gran mayoría, representados por un 75%, opinaron que su evaluación respecto al cumplimiento de las políticas públicas para la defensa de los derechos de la mujer es BUENA y un 16.67% de los encuestados respondieron que su evaluación es REGULAR, pero un 8.33% respondió que su evaluación era MALA. Esto nos hace reflexionar, toda vez que, aunque en un principio todos los encuestados asumían en un 100% la efectividad de la gestión de políticas públicas a favor de los derechos la mujer por la Comisión de la Mujer y Familia, existe una renuencia para buscar la unanimidad en la respuesta, y se deciden por evaluarla como Bien eficaz en un 75% y de regular a mala en un 25%.

La respuesta al 100% de los encuestados vuelve a ser unánime ante la pregunta: *¿Considera usted que la gestión de la Comisión de la Mujer y Familia le está dando prioridad al tema de violencia contra la mujer?*, los encuestados por unanimidad en un porcentaje representado por un 100% respondió que la Comisión de la Mujer y Familia SI le está dando prioridad al tema de violencia contra la mujer. Ante la pregunta: *¿Qué tan eficaz considera Ud., que es la gestión de políticas públicas para la optimización de los derechos de la mujer en el Perú?*, los encuestados en su gran mayoría representados por un porcentaje de 91.67% respondieron que la gestión de políticas públicas para la optimización de los derechos de la mujer en el Perú es BIEN EFICAZ, solo un 8.33% respondieron que era REGULARMENTE EFICAZ, y nadie optó por la tercera alternativa. Esto quiere decir que prácticamente existe consenso entre los encuestados para dar por determinada la eficacia de la gestión de las políticas públicas sobre los derechos de la mujer en la Comisión de la Mujer y Familia en el periodo 2016-

2017. Finalmente, ante la pregunta: *¿Para Ud., las políticas públicas Contra la Violencia hacia la Mujer le ayudan a la mujer a conocer acerca de sus derechos como mujer?*, los encuestados en forma unánime representados por un porcentaje de 100% respondieron que las políticas públicas contra la violencia hacia la mujer SI le ayudan a la mujer a conocer acerca de sus derechos como mujer, esto quiere decir que para los encuestados las políticas públicas tienen un rol relevante cuando se trata de proteger y defender los derechos de la mujer, significando un signo muy positivo para los propósitos de la presente investigación.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

La investigación desarrollada nos ha permitido llegar al cumplimiento de los objetivos trazados, cuyas conclusiones se detallan a continuación:

Se ha logrado analizar la gestión de las políticas públicas de la Comisión de la Mujer y Familia en el Periodo anual 2016-2017, resultando fructífero dicho análisis toda vez que nos ha permitido confirmar un valioso aporte teórico y bibliográfico importante sobre gestión de políticas públicas y sobre los derechos de la mujer.

El fundamento teórico del análisis de la Gestión de las Políticas Públicas de la Comisión de la Mujer y Familia en el Periodo anual 2016-2017 tiene un prolijo aporte bibliográfico de autores que han logrado cimentar con bases sólidas que tanto la gestión como las propias políticas públicas en su conjunto permiten solucionar los problemas que en un momento dado los ciudadanos, en este caso las mujeres, son tratadas con carácter de prioridad, permitiendo de esta manera salvaguardar sus derechos y afrontando con énfasis la violencia contra la mujer.

La aplicación de una encuesta al personal que labora en la Comisión de la Mujer, nos ha permitido determinar que la Gestión de las Políticas Públicas en dicha Comisión si es eficaz, tal como lo demuestran los resultados porcentuales encontrados a través de la recolección de datos en el Periodo anual 2016-2017.

5.2. Recomendaciones

Una forma de combatir la violencia contra la mujer debería ser siempre a través de estrategias de prevención orientadas desde el Estado hacia la sociedad civil cuya intención y propósito sea la de capacitar a líderes y lideresas comunitarias en acciones de prevención y detección de casos de violencia familiar.

El Estado, a través de sus políticas públicas, debería desarrollar acciones dirigidas esencialmente a favor de la mujer, integrando cuotas de género, que permita la participación activa de hombres en políticas sobre violencia contra las mujeres, aplicando efectivamente uno de los criterios de las políticas públicas con enfoque de género.

Se sugiere que sea el Estado, a través de políticas públicas idóneas, quien ponga en práctica estrategias diferenciadas entre lo que se dice (dirigentes políticos), lo que debe ser (técnicos) y lo que finalmente resulta de la aplicación de las acciones en materia de prevención de la violencia contra las mujeres en nuestro país.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Andía, W. (2009). *Manual de Gestión Pública. Pautas para la aplicación de los sistemas administrativos*. Editorial El Saber, Lima. 358 pág.

Benavente, C. y Valdés, A. (2014). *Políticas Públicas para la Igualdad de Género. Un aporte a la autonomía de las mujeres*. ONU-CEPAL, Chile.

Bodelón, E. (1998). *La igualdad y el movimiento de mujeres: propuestas y metodología para el estudio del género*. Universidad Autónoma de Barcelona, *Working Paper*, núm. 148, Barcelona.

CEPAL (2010). *Reunión internacional sobre buenas prácticas de políticas públicas para el Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe, serie Mujer y Desarrollo, N° 104 (LC/L.3231-P)*, Santiago de Chile, julio.

CMF (2017). Comisión de la Mujer y Familia. Plan de Trabajo Periodo Anual 2016-2017. Congreso de la República del Perú.

Ivancevich, J. (1996). *Gestión, Calidad y Competitividad*. 1era. Edición. Editorial McGraw Hill, Interamericana – España. 832 pág.

Lemieux, V. (1995). *Estado de Políticas Públicas*. Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval.

Massolo, A. (2003). *Participación de las mujeres en los gobiernos locales de América Latina*. Memoria del Primer Encuentro Nacional de presidentas Municipales. Coords. Dalia Barrera y Alejandra Massolo. México: Instituto Nacional de las Mujeres.

Merlo, I. (2012). *Los modelos de organización pública de los gobiernos locales y la calidad de sus políticas*. Tesis para optar el grado de Doctorado en Gobierno y Administración Pública, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, pp. 98-111.

Mokate. K. (2001) *Eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad ¿qué queremos decir?* Documentos de trabajo 124. Banco Interamericano de Desarrollo, Julio.

Moyado, F. (2002). *Gestión pública y calidad: hacia la mejora continua y el rediseño de las instituciones del sector público*.

OEA - *Curso de Género y Liderazgo Político en el contexto Latinoamericano y del Caribe* - 4ta. Edición. Módulo III: Políticas implementadas y lecciones aprendidas.

Ordaz, G. (2008). *Políticas públicas para familias: experiencias exitosas en otros países aplicables en el Distrito Federal. Iniciativa ciudadana y desarrollo social*, México D. F., p. 45.

Portocarrero F. y Romero M. (2000). La “caja negra” o el proceso de formulación e implementación de políticas públicas: el caso del PRONAA. En Felipe Portocarrero S. (editor). *Políticas sociales en el Perú: nuevos aportes*. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, pp. 153-190

Ramos, C. (2013). *Análisis de la Aplicación de las Políticas Públicas en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMDES a través de los Servicios de los Centros Emergencia Mujer de Lima, San Juan de Lurigancho y Comas durante los años 2008-2010*. Tesis presentada a la PUCP.

Lima, Perú. Disponible en
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5457/RAMOS_BALLON_CARINO_ANALISIS_VIOLENCIA.pdf?sequence=1

Thoening, J. y Meny, Y. (1989). *Políticas Públicas*. Editorial Ariel S.A. Madrid. España.

Valiente, C. (2005). La efectividad de los organismos de igualdad: El estado de la cuestión en el ámbito internacional. Ponencia presentada en el VII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración: Democracia y Buen Gobierno. Madrid.

ANEXO

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA COMISIÓN DE LA MUJER (CONGRESO DE LA REPÚBLICA – LIMA).

1. ¿Considera usted que las políticas públicas en relación a la violencia contra la mujer que se han implementado por el actual gobierno están efectivamente orientadas a la defensa de los derechos de la mujer?

SI () NO ()

2. ¿Considera usted que la actual gestión de políticas públicas llega a todos los actores involucrados (Municipalidades, Gobierno Regional, etc.) para la disminución de la violencia contra la mujer?

SI () NO ()

3. ¿Cuál es la evaluación que usted puede hacer sobre el cumplimiento de las políticas públicas para la defensa de los derechos de la mujer?

Buena() Regular () Mala ()

4. ¿Considera usted que la gestión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables le está dando prioridad al tema de violencia contra la mujer?

SI () NO ()

5. ¿Considera usted que la gestión de la Comisión de la Mujer le está dando prioridad al tema de violencia contra la mujer?

SI () NO ()

6. ¿Considera usted que las políticas públicas sobre los derechos de la mujer permiten solucionar los problemas de manera eficiente?

SI () NO ()

7. ¿Las políticas públicas incluyen el enfoque de equidad de género como instrumento fundamental para lograr la disminución de la Violencia Familiar?

SI () NO ()

8. ¿Usted cree que hay suficiente capacidad presupuestaria en la ejecución de las políticas públicas de lucha contra violencia de género en el Perú?

SI ()

NO ()

9. ¿Se encuentra usted completamente informado (a) sobre la Ley Nro. 30364?

SI ()

NO ()

10. Haciendo un balance con su experiencia ¿cómo se ejecutan las políticas públicas de lucha contra violencia de género en el Perú?

Excelente ()
()

Bien ()

Regular ()

Mal ()

11. ¿Para Ud., las políticas Contra la Violencia Hacia la Mujer le ayudan a la mujer a conocer acerca de sus derechos como mujer?

SI ()

NO ()

12. ¿Qué tan eficaz considera Ud., que es la gestión de políticas públicas para la optimización de los derechos de la mujer en el Perú?

Bien eficaz ()
eficaz ()

Regularmente eficaz ()

Pésimamente